



General Carlos Prats González, Comandante en Jefe del Ejército de Chile hasta agosto de 1973, asesinado en Buenos Aires en septiembre de 1974.

↓ Sofia Cuthbert de Prats encontró la muerte junto a su esposo cuando manos criminales activaron la bomba frente a su casa en el barrio Palermo.



CASO PRATS: **En la pista de los asesinos**

MARIA OLIVIA MONCKEBERG PATRICIA VERDUGO

● **"Bomba en una calle de Palermo" revela antecedentes para la investigación y la red terrorista de la DINA.**

● **Testigo clave asegura que un general participó en el asesinato.**

● **Cédulas de identidad de detenidos-desaparecidos fueron incautadas al agente de la DINA en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel.**

Tres miras apuntan directamente al Régimen chileno, emplazados en tres capitales del mundo: Washington, Buenos Aires y Roma. Tres atentados que conmovieron al mundo y que costaron la vida al ex canciller Orlando Letelier y Ronnie Moffit (1976), al anterior comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, y su esposa Sofia Cuthbert (1974), y dejaron gravemente heridos al ex vicepresidente de la República, Bernardo Leighton, y su esposa Anita Fresno (1975). Detrás de todos ellos, la siniestra red de terrorismo internacional desplegada por la DINA, organismo dirigido por el entonces coronel Manuel Contreras Sepúlveda.

En febrero, la aparición en Washington del mayor Armando Fernández Laríos marcó la reapertura del caso Letelier. En marzo fue detenido por la policía italiana y luego deportado a su país el terrorista italiano Stefano Delle Chiaie. El juicio contra Delle Chiaie debiera destapar espectaculares revela-

ciones acerca de las conexiones internacionales de la DINA, para la cual el italiano cumplió importantes tareas, entre las que habría estado el intento de asesinato del matrimonio Leighton. Nada hace prever que los gobiernos de Chile e Italia puedan llegar a un "pacto" para que Delle Chiaie no declare su colaboración con la DINA. Las respuestas de Fernández Larros al exhorto que le despachara en marzo el juez argentino Juan Eduardo Figoli dirán, en definitiva, qué tan libre está para aclarar sus viajes a Buenos Aires antes y después del asesinato del general Prats y su esposa. Porque lo que está claro es que, en 1978, el gobierno chileno condicionó la entrega del agente Michael Townerly a que sus declaraciones se limitaran al caso Letelier. Estados Unidos firmó el pacto a sabiendas de lo que se ocultaba: los atentados contra Prats y Leighton.

Pero hoy el caso Prats irrumpe a la opinión pública por primera vez en trece años. Llegan desde Argentina exhortos para el rector de la Universidad de La Serena, el general (R) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien fuera agregado militar chileno a la fecha del asesinato; para el entonces embajador en Buenos Aires, René Rojas Galdames; y también vendría —entre otros— para un general en servicio activo: el comandante de la cuarta zona del Ejército, con asiento en Valdivia, Raúl Iturriga Neumann, quien en 1974 era jefe del Departamento

Exterior de la DINA. En los últimos meses declararon también por exhorto, ante la Embajada argentina en Santiago, tres chilenos que aportaron significativos antecedentes: el ex agregado militar en Buenos Aires coronel (R) Carlos Ossandón y el ex embajador en Argentina Ramón Huidobro, ambos amigos del general Prats, y la señora Slavia Luksic, cuyo testimonio revela un interesante dato sobre un personaje clave en esta historia: el agente de la DINA Enrique Arancibia Clavel.

En este contexto, con el caso Prats en las primeras planas noticiosas, aparece la exhaustiva investigación realizada por los periodistas Edwin Harrington y Mónica González, autores de "Bomba en una calle de Palermo" que —esta semana— sale a las librerías publicado por editorial Emisión. En las 500 páginas se encuentran revelaciones hasta ahora inéditas, datos conocidos y olvidados, y se ligán antecedentes que permitirán avanzar en el esclarecimiento del caso Prats y el conocimiento de esa máquina de poder infernal que fue la DINA. Junto con dar su interpretación del último período de la vida del general Prats, van —después de su muerte— siguiendo las intrincadas huellas del terrorismo internacional en que participaba la DINA, en particular con su conexión Buenos Aires. Asimismo, se establece a través de los pasos de algunos "protagonistas" no sólo las relaciones entre los casos Prats y Letelier.

También, entre el asesinato del general Prats (1975) y del comandante en jefe del Ejército, René Schneider Chereau en Santiago (1970).

QUIEN ERA PRATS

En la descripción del rol que le cupo al general Prats en la crisis de 1973, la carta que escribió al entonces embajador en Buenos Aires, Ramón Huidobro, es, según los autores, "de una clarividencia escalofriante". Fechada el 6 de septiembre de 1973, poco antes de abandonar la Comandancia en Jefe del Ejército, la misiva indica:

"¿Cuál ha sido mi pecado, Ramón? Querer que se produjera un consenso mínimo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana, para que el proceso de cambios se encauzara en moldes legales definidos, al lograrse por la vía legislativa, hasta ahora bloqueada por la oposición. Así se aseguraba la continuidad de la aventura golpista (en la que muchos peces gordos están embarcados) o la lucha subversiva (que quieren promover los ultraquierdistas)".

"El momento que hoy vive el país es realmente un drama y no sé si cuando recibas esta carta los acontecimientos se hayan precipitado; los golpistas ahora no se atreven a derrocar directamente al Gobierno, usando el viejo estilo; se busca entonces paralizar totalmente el país para colocar al Presidente en la gran



El comandante en jefe Prats y los generales Pinochet, Oscar Bonilla y César Raúl Benavides con el Presidente Allende y el ministro de Defensa José Tóha.

encrucijada: o renuncia o él desata la violencia popular y da el 'pretexto' para que las Fuerzas Armadas pasen a 'restablecer la ley y el orden'...

Los acontecimientos se precipitaron. Cinco días después —el 11 de septiembre— estallaba el Golpe Militar. Fue el propio general Pinochet quien, según revelan los autores, advierte a Prats que sólo podrá conseguir el permiso para abandonar el país "si accede a presentarse públicamente ante las cámaras de televisión para garantizar que no está comandando tropa alguna para enfrentar

a las Fuerzas Armadas. Prats acepta el acuerdo. No tiene muchas alternativas..."

Detalles inéditos de su partida figuran en el libro: por tierra, el automóvil del General enfiló rumbo al cruce fronterizo con el chofer Germán López al volante y el coronel René Escariza atrás, usando la gorra del general, ya que "se eligió a sí mismo como señuelo" ante la posibilidad de un atentado. Por aire, en un helicóptero que lo llevó desde Tobalaba a Portillo, viajó Prats junto al mayor Osvaldo Zavala.

En Buenos Aires, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, Prats fue recibido por el comandante en jefe del Ejército argentino Jorge Raúl Carcano. Obruno trabajo como gerente comercial de la empresa Gomalex y vivió en un departamento de la calle Malabia, barrio Palermo, con su esposa Sofía. Su seguridad fue puesta en manos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). A la muerte de Perón, el general Carcano —un militar democrático como Prats— dejó el cargo, en tanto que la Presidencia la asumió la viuda de Perón, Isabel Martínez, y controlaba el poder y la vida de los argentinos su ministro de Seguridad Social, José López Rega. Fue un período de gran inestabilidad y de asesinatos políticos que iban in crescendo. En ese clima —relatado con detalles en el libro— se trasladó la seguridad del general Prats a manos del SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), equivalente a la CNI chilena y en el cual López Rega y los hombres del ultraderechista grupo Milicia tenían plena ingerencia.

ANCLADO EN BUENOS AIRES

En ese ambiente, cada día más incierto, hubo una amenaza para el general chileno. El 2 de septiembre una

voz le dijo, por teléfono, que lo matarían de no aclarar públicamente su ninguna actividad contra la Junta Militar chilena. El propio general Prats lo relató en su diario, según revela la investigación de los periodistas: "Llama un desconocido con forzado acento argentino. Dice que forma parte del grupo mercenario croata, que está pagado por la derecha para asesinarlo a partir de hoy. El sujeto dice que recibieron instrucciones en Montevideo de un teniente coronel del Ejército de Chile. Agrega que ellos saben que quiero irme a Brasil. Que la única manera de salvar mi vida es convocar hoy a una conferencia de prensa..."

El libro entrega detalles acerca de la dilación para el otorgamiento de pasaportes para el matrimonio Prats Cuthbert, por parte de la embajada chilena en Buenos Aires. Las víctimas quedaron entonces ancladas en esa ciudad, pese al peligro inminente que amenazaba sus vidas. Dos meses antes del asesinato, los esposos Prats habían iniciado la gestión para obtener esos documentos. "En ese momento Prats tenía en su poder dos invitaciones formales: una del Instituto de Cultura Hispánica y otra de una institución universitaria de Inglaterra, pero ante el Consulado se especificó —por aquello de las dudas— que el matrimonio pensaba visitar Brasil". Este destino de viaje —consignan los autores— "se anunció única y exclusivamente a la Embajada de Chile". Y se preguntan: "¿Cómo fue posible que la voz amenazadora que llamó a Prats la madrugada del 2 de septiembre hiciera mención a que ellos (el comando asesino) sabían que quería irse a Brasil?"

Cuentan los periodistas que, después de la amenaza, Ramón Huidobro conversó privadamente con el embajador Rojas Galdames para prevenirlo del peligro que corría Prats: "¡No me pueden hacer esto a mí, no me pueden tocar al general!; con lo que me ha costado a mí arreglar toda esta situación con el Gobierno argentino!"; habría sido la respuesta de Rojas Galdames, según el relato de Huidobro, quien le replicó: "René, tienes en tu mano que se vaya esta tarde. Yo te lo saco esta noche por Iberia, que le den los pasaportes, pues; hoy, mañana, pasado, y te sacas la preocupación de encima como embajador..."

No hubo pasaportes. Y llegó el domingo 29 de septiembre. Ese día, apuntan Harrington y González, "la primavera se manifestaba cálida y húmeda en Buenos Aires, a las nueve y media de la noche. A esa hora regresaba a su casa la señora María Rufina Leyes de Trucco, inquilina del edificio de departamentos de Malabia 3359, a quien

Operación Colombo

Un momento extremadamente duro y difícil vivió el periodista Mónica González mientras investigaba el proceso Prats en Buenos Aires y encontró pruebas acerca de la "Operación Colombo", por la que la DINA —en connivencia con servicios de seguridad argentinos— intentó hacer aparecer en suelo trasandino a detenidos-desaparecidos, muertos en centros de tortura chilenos.

Tras recordar, con los recortes de prensa, la connivencia de los diarios oficialistas en la etapa pre-operativa (anuncio de preparativos del MIR en Argentina para cruzar la frontera y denuncia de "falsos secuestrados" de miristas para enrolarse en la guerrilla), se llegó al dramático momento de fines de julio de 1975: dos publicaciones falsas —"O'Día" y "Lea", que se imprimieron por esa única vez— aseguraron que "miristas" habían muerto. Sesenta habían sido eliminados por sus propios compañeros. Y 59, en choques con fuerzas antiguerrilleras en Salta.

La agencia Latin Investigó lo sucedido. Y pudo determinar que el editor de "Lea", quien según su pie de imprenta se llamaba Juan Carlos Viera, no estaba registrado en ningún organismo gremial o empresarial de la prensa argentina. Y su dirección —Brandsen 4845— supera la numeración de esa vía bonaerense. Pero una sobrepresión despertó sospechas:

el número podía ser 485 o 1.485. El primero resultó ser el estudio de Boca Juniors y el segundo, la editorial Codex. Posteriormente, apuntan los autores, "el distribuidor Fernando Varreira, el único nombre auténtico que incluía la revista, declaró: Codex nos entregó 20 mil ejemplares para su distribución en la capital".

Codex resultó ser una editorial propiedad del Estado argentino, dependiente directamente del Ministerio de Bienestar Social, cuyo titular era José López Rega, "instigador del grupo 'Milicia' a cuyas filas pertenecía Martín Ciga Correa".

Martín Ciga Correa... Los investigadores encontraron su nombre en la declaración de Enrique Arancibia Clavel, prestada ante el SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) en noviembre de 1978: "En 1975, con motivo de la llegada a Buenos Aires de otro agente de la DINA llamado Iturriga, en esa época mayor del Ejército chileno (se refiere al hoy general Raúl Eduardo Iturriga Neumann, jefe de Operaciones Exteriores de la DINA desde 1974), cuyo arribo me había sido anunciado y con el que tomara contacto sin recibir, de parte del mismo, dato alguno sobre la operación que pensaba realizar en Buenos Aires, estima el causante en razón de su poca antigüedad dentro de la DINA, vuelve a contactar a

Martín Ciga Correa, ya que transcurridos algunos días de la llegada del citado agente, me encuentro nuevamente con el mismo, quien me refiere que volvía a Chile en razón de haber fracasado en su objetivo".

Y sigue Arancibia Clavel: "Inquiriéndole sobre los motivos de ese fracaso y sugiriéndole la posibilidad de ayudarlo en lo que resultara factible, Iturriga me informa que su misión consistía en hacer aparecer a un subversivo chileno —cuyo nombre podría ser Zimelman o algo parecido, muerto en Chile— en nuestro país, habiéndose bautizado este operativo como "Operación Colombo". Procedí a conectar a Iturriga con Martín Ciga Correa, poniéndome ambos de acuerdo para realizar esta tarea".

"Zimelman" no puede ser otro —revisando las listas— que el ingeniero David Silbermann Gurovich, ex gerente general del mineral de Chuquibambilla, quien cumplió en la Penitenciaría de Santiago una condena de trece años cuando —en octubre de 1974— fue sacado por la DINA y desapareció tras pasar por recintos de tortura.

Pero no sólo se trataba de Silbermann. En los Tribunales de Justicia de Buenos Aires, Mónica González logró llegar hasta los gruesos fajos de papel que le fueron incautados a Enrique Arancibia Clavel tras su detención. "Difícil olvidar ese momento", recuerda. Porque el inspector Oscar Gutiérrez no sólo incautó las carpetas con los informes firmados tanto por Luis Felipe Alemarte (chapa de Arancibia Clavel) como por Luis Gutiérrez

(chapa del general Raúl Iturriga) y otros importantes documentos. En un sobre color madera, junto a una esquila de saludos del entonces coronel Manuel Contreras, había varias cédulas de identidad:

- C.I. N° 4.019.953 a nombre de Alfredo Rojas Castañeda.
- C.I. N° 5.110.397-1 a nombre de Luis Francisco González Manríquez.
- C.I. 5.922.332-1 a nombre de Mario Fernando Peña Solari.
- C.I. N° 21.429 (Quilpué) a nombre de Amelia Bruhn Fernández.
- C.I. N° 6.346.849-5 a nombre de Samuel Osvaldo Abarca Molina.

Todos ellos, salvo dos, figuran en las trágicas nóminas de detenidos-desaparecidos. El caso de Luis Francisco González Manríquez no fue denunciado y la única pista —hallada por los investigadores— la dio Cecilia Jarpa, quien declaró haber estado detenida en el cuartel de la DINA de José Domingo Cañas junto a González. Ella agregó que González no tenía familiares en Santiago y, por tanto, no se habían hecho los trámites para denunciar su caso.

Agreden los autores: "Tampoco fue posible localizar el paradero de Samuel Osvaldo Abarca Molina. Su nombre no figura en nómina alguna de detenidos-desaparecidos. Tampoco se encontró algún testimonio que informara de su detención o cautiverio. Existe la esperanza de que estas líneas permitan dar con alguna huella de Samuel Abarca".



Las hermanas Prats no han desistido desde que murieron sus padres. Son los verdaderos motores de la investigación que lleva la justicia argentina. En reiteradas ocasiones han acusado a la DINA.

llamó la atención que las luces de la intersección de las calles Cerviño y Malabia, hacia Libertadores, estuvieran apagadas. De acuerdo con una declaración formulada cuatro días después a la policía federal, se trataba de un hecho inusual. A una cuadra de distancia, en la esquina de Malabia con Cabello, distinguí también la presencia de personal policial uniformado".

Tras un domingo muy particular —un asado campestre, una ida al cine y finalmente comida en casa de Ramón Huidobro— el general Prats y su esposa llegaron a las 0.40 horas del lunes 30 de vuelta a su casa. Después de accionar la puerta de la cochera y al momento de

tomar nuevamente el general el volante, los asesinos accionaron la bomba por control remoto. El techo del auto quedó sobre la terraza del edificio del frente, de ocho pisos.

¿QUIEN LOS MATO?

Por años, la justicia argentina poco y nada hizo para dar con los autores y cómplices del asesinato. Pero hay pistas nítidas que, si el juez Fegolli las sigue con dedicación, pueden ayudarlo a encontrar la verdad. Está el informe del fiscal argentino Oscar Matio Salvi de febrero de 1983, quien al pedir la extradición de Michael Townley a EE UU afirmó: "Luego de una paciente y prolija

investigación puedo afirmar sin hesitación que el doble homicidio fue ejecutado por Michael Townley, quien contó con la colaboración de autoridades chilenas, quienes planificaron el atentado en razón del carácter de opositor de la víctima".

Tal como consignan los autores de "Bomba en una calle de Palermo", Michael Townley y su esposa entraron a Argentina el 10 de septiembre de 1974, abandonaron Buenos Aires la tarde de lunes 30 de septiembre, con destino a Montevideo. Realizaron el vuelo por vía aérea Pluna y regresaron a Santiago en las primeras horas del martes 1° de octubre.

Hubo otros viajes significativos por esos días. El libro consigna el testimonio que recientemente entregara a la Embajada argentina la señora Flavia Luksis: "El día que asesinaron al general Carlos Prats llamé a la señora Violeta Clavel de Arancibia para comentar la desgracia ocurrida al general. Cuando ella hizo mención al hecho, por teléfono escuché al hijo, Enrique Arancibia Clavel, que gritó fuerte: "¡Así mueren los traidores!". La señora Arancibia se paralogizó y no quiso seguir conversando, sólo comentó que su hijo Enrique había regresado de Buenos Aires poco antes".

La misma señora Luksis —amiga de la madre del agente de la DINA— declaró también que "Enrique Arancibia Clavel era militante de Patria y Libertad y se fue a vivir a Buenos Aires poco después de la muerte del general Schneider. Su madre,

Orozco y el sargento desaparecido

Bajo el subtítulo "Réquiem por dos buenos colaboradores", la investigación periodística se sumerge en los tenebrosos detalles que rodearon el "suicidio" de Carlos Guillermo Orozco y la desaparición de Guillermo Jorquera. El primero, desde la Cancillería, tramitaba los pasaportes oficiales que la DINA requería para sus misiones en el extranjero y antes —según se revela— debió estar en conocimiento de las operaciones de la DINA en Buenos Aires; su secretaria en la embajada, Sonia Montecinos, era el contacto de Enrique Arancibia Clavel para la entrega de documentación que se incluía en la valija diplomática.

El sargento de Ejército Guillermo Jorquera fue detenido el 23 de enero de 1978 por Carabineros, luego de un frustrado intento por aislarse en la embajada de Venezuela en Santiago. Carabineros lo entregó ese mismo día al capitán Adolfo Born Pineda, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, quien declaró luego haber llevado a Jorquera hasta el noveno piso del Ministerio de Defensa: "Acto seguido pasó a conversar con el general Héctor Orozco, quien me dijo que el suboficial había sido dado de baja del Ejército, por lo cual me ordenó que le retirara su TIM (Tarjeta de Identificación Militar) y lo despachara, lo que cumplí". Agregó el oficial Born que lo

acompañó hasta el ascensor... y nunca más, ni él ni nadie, volvió a saber de Jorquera.

Los periodistas Harrington y González se preguntan: "¿El director de Inteligencia hace comparecer hasta sus oficinas a un suboficial de Inteligencia y de la DINA que acaba de intentar aislarse, y simplemente decide que debe partir?". Se confía, agregan los autores, en que "nadie extraño al Ejército conoce la verdadera actividad de Jorquera y las misiones en que ha estado comprometido". Y, ¿cuál es esa verdadera actividad? Jorquera fue un suboficial destacado en labores de Inteligencia y, desde los años 60, informa y se infiltra en partidos políticos de izquierda. Y en marzo de 1974, "un nuevo encargo de gran importancia le es asignado. Junto al mayor de Ejército Gerardo Alejandro Huber Olivares partirá a la Argentina en una misión encomendada por la DINA y con personal del Servicio para infiltrarse en los aparatos clandestinos del ERP y Montoneros". Y en septiembre de 1974, sostienen los autores, ayudó al equipo DINA en la misión de asesinar a Prats.

Tras regresar a Chile y cumplir importantes funciones, en agosto de 1976 fue destinado en comisión de servicio al Departamento de Seguridad de la Cancillería, "donde colaborará para resolver algunos detalles" en los preparativos para asesinar a Orlando Letelier.

El libro revela un oficio reservado que lleva la firma del ahora general Enrique Valdés Puga, subsecretario de Relaciones Exteriores, fechado en noviembre de 1976: "El desempeño del suboficial Jorquera en el Departamento de Seguridad del Ministerio se considera excelente. Se deja constancia que desde la presentación del SOF Guillermo Jorquera Gutiérrez al Departamento de Seguridad, éste se ha visto incrementado por un profesional que domina ampliamente su especialidad. Como asesor de la Sección "Análisis" y a cargo de "Investigaciones Especiales", además de otras, se evidencia que se cumplen los objetivos que se tuvieron en vista para solicitarlo en Comisión a esta Secretaría de Estado".

Los investigadores anotan que Jorquera cambió a partir de agosto de 1977 y su estado anímico empezó tras el "suicidio" de Orozco. En enero de 1978 intentó aislarse y desapareció. Durante su búsqueda, la hermana —Beatriz Jorquera— fue secuestrada y amenazada de muerte. El padre —José Jorquera— recibió una explicación del subdirector del Regimiento Blindados N° 2: "Se habían extraviado unos documentos relacionados con el caso Letelier, de lo cual se responsabilizó a su hijo por lo que se le marginó del Ejército". Y su esposa —Hermilina Codocedo— fue visitada por el agente Otto Trujillo (DINA) en mayo de 1979: "Le comunicó que su marido había sido llevado a un recinto militar vecino a la ciudad nortina de Arica, donde se lo asesinó".

Un planteamiento contundente

JORGE DONOSO



Con ocasión de la conmemoración del 1° de Mayo, el presidente del Comando Nacional de Trabajadores, Rodolfo Seguel, pronunció un discurso en el Teatro Carriola que fue radiodifundido al país por las emisoras Cooperativa y Chilena. Este mensaje a los trabajadores y al país en general fue entregado por encargo y con la aprobación del Consejo Directivo Nacional de ese organismo sindical.

En la exposición hecha por Seguel están contenidos los criterios básicos y fundamentales del CNT con relación a la situación que vive el país en este momento. Nadie podrá negar la autoridad moral que tiene este organismo para emitir su pronunciamiento respecto a la dura y delicada realidad que debemos soportar los chilenos y, muy especialmente, los trabajadores. Fue el Comando Nacional de Trabajadores, cuando estaba recién constituido, el que encabezó todo el movimiento de protesta de los años 83 y posteriores, el que había sido iniciado en la Confederación de Trabajadores del Cobre, con la resuelta conducción del propio Seguel a la cabeza.

La decidida actuación de los dirigentes sindicales les costó a ellos mismos y a todo ese sector social muchos sacrificios. Para ellos hubo cárcel, relegación, tortura, despidos masivos, etc. Pagando ese alto precio se abrieron tímidamente algunos espacios democráticos en el país. Los mismos que algunos ocupan (¡oh paradoja!) en denostar, precisamente, a la movilización social.

El Comando —a través de la intervención de Seguel— vuelve a insistir en ese asunto, señalando que la movilización sigue siendo una arma eficaz. Es necesario revisar y corregir su aplicación, pero no se ve el motivo por el cual deba desecharse.

Luego reitera su disposición a participar en todas las iniciativas de concertación social. No podía ser de otro modo, ya que fueron los trabajadores los que plantearon la necesidad de llevarla a la práctica y han participado entusiastamente en los esfuerzos por concretarla.

El CNT formula un llamado a los partidos políticos —una vez más— para que alcancen el acuerdo necesario para dar los pasos indispensables en el camino de la recuperación de la democracia.

Manifiesta su propósito, ya formulado y probado repetidamente, de contribuir al llamado a la reconciliación hecho por los obispos chilenos y reforzado por la presencia y la palabra del Santo Padre. Recuerdan que esta reconciliación debe estar "fundada en la Verdad y en la Justicia", como lo dijera S.S. Juan XXIII. Eso, naturalmente, excluye el "botrón y cuenta nueva" con los que algunos pretenden conseguir su propia impunidad.

También hay un largo capítulo destinado a plantear lo que son sus reivindicaciones más urgentes. No cabe duda de que son los trabajadores los que han soportado el mayor peso de una política económica injusta y gravemente dañina para el país. Con estoica paciencia los dirigentes sindicales han planteado su situación a los responsables de este descalabro, encontrándose casi siempre con un silencio inexplicable, si no con la represión. Sus aspiraciones están contenidas en un memorándum hecho llegar a los ministros del Trabajo y de Hacienda. Por supuesto, sin respuesta.

Pero el Comando no se queda sólo en emitir juicios y formular peticiones. Los dirigentes proponen medidas para avanzar en la solución de los problemas que aquejan al país y que permitirán transitar hacia la democracia.

Entre sus proposiciones está la de constituir "comisiones conjuntas" con los partidos políticos y otros sectores sociales para elaborar una propuesta democrática que contemple las aspiraciones de los trabajadores y de los demás sectores populares.

Es necesario que las cuestiones planteadas por los trabajadores no caigan en el vacío y que ellas sean analizadas por los actores sociales y políticos, entregando en seguida una opinión al respecto. Especialmente importante es que los partidos respondan a este verdadero desafío que les ha sido formulado amistosa pero claramente.

Por su parte, los dirigentes sindicales tienen que transformar en hechos lo que han formulado como caminos, especialmente la reactivación de la movilización social y la constitución de una central unitaria, autónoma, pluralista y democrática. **d**

Violeta, contaba que trabajaba en el Banco del Estado en Buenos Aires y ella misma hacía bastantes viajes para verlo".

Indican los autores que este personaje —nacido en Punta Arenas en 1944— se fue a vivir a Buenos Aires en calidad de prófugo del caso Schneider en 1970. Después del Golpe se convirtió en el hombre de la DINA en Buenos Aires. En 1978, con Townley ya preso y acusado de autor del asesinato de Letelier, su nombre salta a la luz pública como cómplice de Townley en sus correrías en Argentina.

Otro testimonio clave que revela el libro es el de Sofia Prats, la hija mayor



General (R) Luis Ramírez Pineda, actual rector de la Universidad de La Serena. Citado por exhorto a declarar ante la justicia argentina. Era el agregado militar de la embajada chilena en Buenos Aires al momento del crimen.

del general asesinado, prestado en 1983 en Buenos Aires. Señaló que "una persona de la cual todavía no puedo aportar el nombre, que vivió en Buenos Aires en 1974, manifestó que tuvo contacto con gente de la DINA que en distintas oportunidades solicitó su colaboración. Así fue que facilitó su propia casa para personal de ese servicio de inteligencia chileno". Esa persona —dice Sofia Prats— "recuerda haber conocido como miembro de ese servicio al coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien dirigía ese grupo, y a Jorge Iturriaga Neumann, hermano del nombrado. También recuerda a Mario Igualte y al subteniente en retiro del Ejército, Sergio Ramón Rocha Aros (...). También recuerda haber conocido al mismo Michael Townley".

Mucho tiempo después —relata Sofia Prats— el mismo testigo "ya viviendo en Chile, se encontró con Jorge Iturriaga y éste le comentó que la última vez que habían estado juntos en Buenos Aires, ellos estaban ocupados en la misión de asesinar al general Carlos Prats González".

La declaración de Sofia Prats consta en el proceso... **d**